



Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

Buenos Aires, 17 de abril de 2026.

Y VISTOS: estos autos N° 36.569/2025/1, caratulados “Incidente N° 1 - ACTOR: Finadiet S.A. Com Ind Fin e Inmob DEMANDADO: Comisión Arbitral del Convenio Multilateral - RESOL 104/04 y RESOL 6/2020 s/inc apelación”, y

CONSIDERANDO:

1°) Que por resolución de fecha 28 de noviembre de 2025, el Sr. juez de la instancia de origen rechazó la medida cautelar peticionada por Finadiet S.A. Com. Ind. Fin. e Inmob. (en adelante, Finadiet), a los efectos de que se ordenara a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB) que -de forma inmediata- no sustrajera más montos de dinero de las cuentas bancarias de su parte a través del sistema SIRCREB, como así tampoco no percibiera más el impuesto sobre los ingresos brutos en los despachos de importación según el SIRPEI.

Destacó que, “... ponderando el contenido total del escrito de inicio se verifica que, en definitiva lo central del planteo se vincula con la alegada indebida aplicación a la firma actora del SIRCREB (‘Sistema de Acreditación y Control de Acreditaciones Bancarias’, conf. Resolución General N° 104/2004), y el denominado SIRPEI (Sistema del Régimen de Percepciones de Importaciones, conf. Resolución General N° 6/2020 y cctes.) cuya autoridad de aplicación es la Comisión Arbitral (COMARB)” -sic-.

Señaló que, en tales condiciones, para poder establecer en el caso la verosimilitud del derecho invocado por la accionante resultaba necesario “... examinar la legitimidad de las estipulaciones cuestionadas e indagar acerca de los sujetos de la relación tributaria y evaluar adecuadamente respecto de registros tributarios, retenciones, percepciones y su estado actual” (sic).

Puntualizó que, “[s]iendo así, y visto que ello excede el marco de conocimiento propio de una medida cautelar, toda vez requiere un ámbito de mayor debate y prueba acorde al desarrollo del proceso en la pretensión principal, corresponde tener por no conformados los elementos establecidos en los incisos

Fecha de firma: 17/04/2026

Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA



#40792592#497847642#20260416192335476



Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

b) y c) del artículo 13 de la ley 26854, pues no se ha podido acreditar la verosimilitud del derecho y determinar indicios de ilegitimidad en la norma cuestionada dentro del estrecho marco del presente conocimiento de una resolución cautelar” (sic).

Recordó, con cita en jurisprudencia, que no procedía una medida cautelar si de la consideración de las circunstancias que señalaba la peticionante se exigiría avanzar sobre los presupuestos sustanciales de su pretensión que, precisamente, constituían el objeto del litigio.

Puso de relieve que ello era así, “[m]áxime, tomando en consideración lo señalado por la demandada al momento de evacuar el informe, en punto a la eventual incidencia que surgiría entre lo que aquí se decida con respecto tanto a las distintas jurisdicciones detalladas en la planilla adjunta a su informe circunstanciado como así también respecto al organismo recaudador ARCA, en su caso, y la potencial afectación al interés público comprometido” (sic).

Concluyó que, por todo lo expuesto, correspondía denegar la solicitud cautelar incoada.

2°) Que, contra dicha resolución, el 3 de diciembre de 2025 la parte actora interpuso recurso de apelación.

Formado el presente incidente, el 12 de diciembre de 2025 la accionante presentó el pertinente memorial.

Mediante la providencia de fecha 23 de diciembre de 2025 se confirió traslado del memorial, que la parte demandada no contestó.

3°) Que la actora realiza, en primer lugar, la reseña de los antecedentes del caso.

3.1) Se agravia de lo decidido en punto a la verosimilitud del derecho.

Tras reproducir el párrafo de la resolución apelada que versa sobre esta cuestión, expone que el Sr. magistrado realiza un arbitrario análisis de los perjuicios ocasionados a su parte con las sustracciones SIRCREB y SIRPEI.





Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

Destaca que lo manifestado por el Sr. juez no basta para denegar la protección cautelar, máxime cuando se encuentran manifiestamente desprotegidos los derechos constitucionales y esenciales de su parte.

Afirma que el perjuicio ocasionado se debe a que la firma se encuentra sufriendo recaudaciones mediante el SIRCREB y el SIRPEI, que mes a mes superan ampliamente el impuesto determinado en dicho período.

Pone de relieve que se obliga a su parte a soportar una especie de empréstito forzoso a los fiscos provinciales, ya que se pretenden detraer fondos que no pueden imputarse al pago del ISIB, en cuanto excede el impuesto determinado en dichas jurisdicciones.

Recuerda que quien ordena las retenciones mediante el SIRCREB y el SIRPEI es la COMARB mediante las resoluciones generales 104/2004 y 06/2020.

Explica que aquí se advierte la arbitraria, improcedente y la vía de hecho ilegítima del proceder de la COMARB, ya que no existe artículo de la Constitución Nacional, ley, acto administrativo conforme a ley, o sentencia judicial que avalen este proceder que emana de un órgano colegiado, como tampoco existe ningún hecho imponible en virtud del cual puedan fundarse las detracciones en cuentas bancarias de los contribuyentes, ni sobre las importaciones que éstos realizan.

Añade que tampoco podría una comisión interprovincial, fiscalizar, ejercer poder de policía e incluso sancionar como agentes de recaudación a entidades bancarias que se encuentran regidas por los contratos del Código Civil y Comercial de la Nación y las leyes 24.240 y 21.526, y cuyo órgano rector es el Banco Central de la República Argentina y/o la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

Puntualiza que tanto el SIRCREB como el SIRPEI escapan a la noción del principio de la legalidad y reserva de ley en materia tributaria, de raigambre constitucional.

Fecha de firma: 17/04/2026

Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA



#40792592#497847642#20260416192335476



Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

Asevera que la resolución 104/2004 (CA) no cuenta con una delegación legislativa que autorice a dicho proceder.

Hace notar que el SIRCREB viene a operar cuando el contribuyente recibe ingresos en cuentas bancarias de su propiedad, mientras que el SIRPEI opera cada vez que la contribuyente importa mercaderías al territorio nacional, sin prever su procedencia o si corresponde tributar sobre esos ingresos.

Alega que no puede reconocerse a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, y mucho menos al Comité de Administración del SIRCREB y del SIRPEI, como autoridad constituida con potestades suficientes para disponer confiscaciones patrimoniales, pues ellas no tienen sustento ni en la ley, ni en sentencia judicial (artículos 4, 17, 19, 99 y consiguientes de la Constitución Nacional).

Esgrime que la Constitución Nacional es muy clara y estricta al consagrar el derecho de propiedad, el principio de legalidad y la reserva de ley en materia tributaria, lo que lleva a exigir que tanto los tributos como los regímenes de recaudación deben estar establecidos por una ley emanada del Congreso, circunstancia que ostensiblemente no ocurre en el caso.

Sostiene que, sin perjuicio de que ante la magnitud del peligro en la demora no corresponde ser tan riguroso en la apreciación de la verosimilitud del derecho, lo cierto es que la tesis de su parte resulta razonablemente verosímil.

En este aspecto, insiste en la manifiesta inconstitucionalidad de las resoluciones generales Nros. 104/2004 y 6/2020.

3.2) En orden al peligro en la demora, apunta que conforme lo acreditó su parte con la certificación contable acompañada, *“...teniendo en cuenta las retenciones y percepciones que viene sufriendo FINADIET, se estaría tributando en la Provincia de Chaco a una alícuota efectiva de 7,28% en vez de alícuota que realmente corresponde del 1,25%, evidenciando un incremento en la alícuota efectiva del 582,63%”* (sic), y que, en tales condiciones, *“... se acreditó*





Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

que la Sociedad se encuentra sufriendo un desmedro financiero permanente y sostenido el tiempo, al acumular en forma constante saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos retenidos y percibidos en las Arcas Fiscales de esa jurisdicción, sin poder disponer de ellos en debido tiempo, con el agravante de la exposición inflacionaria que hace que esos saldos se deprecien mes a mes, todo lo cual termina vulnerando el derecho de propiedad de mi representada” (sic).

Indica que la aplicación a su parte, mes a mes, de nuevas retenciones imputables al pago del tributo devengado en cada período fiscal, trae como consecuencia que el saldo acumulado a su favor como consecuencia de sumas retenidas en exceso se vea incrementado y persista durante un mayor tiempo, al no poder ser imputado en una mayor medida a la cancelación del anticipo mensual determinado, todo lo cual afecta su derecho de propiedad.

Pone de resalto que su parte acreditó mediante la certificación contable, que las exacciones ilegales superan en forma desproporcionada la obligación fiscal que debe afrontar la firma. Así, según afirma:

“i) Se acreditó el ratio que representa el Saldo a Favor sobre el Impuesto Determinado 07/2025, con un incremento ilegítimo por sobre el tributo determinado del 501,54%.

ii) Se acreditó un ratio de 7,28% entre la Base Imponible Neta que correspondió al 07/2025, y el Saldo a favor acumulado en el período. Este ratio lo que hace es exponer la alícuota efectiva que sufre mi mandante a los efectos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, es decir ampliamente superior al promedio de alícuotas por el ejercicio de sus actividades, que promedia en 1,25%, con un incremento de la alícuota efectiva del 582,63%. Es decir, conforme doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re ‘Candy SA c/AFIP y otro s/acción de amparo’ (03/07/2009), de la Certificación Contable que se acompaña se desprende que la alícuota efectiva del tributo a ingresar representa

Fecha de firma: 17/04/2026

Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA



#40792592#497847642#20260416192335476



Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

un incremento superior al 100% de la alícuota correspondiente (a mayor claridad más del doble de la alícuota legal), porcentaje que excede los límites razonables de imposición.

iii) Se acreditó que la recaudación producto de las sustracciones bancarias SIRCREB y percepciones aduaneras SIRPEI, entre el 05/2024 (\$1.435.244,71) a 07/2025 (\$20.923.844,82), se incrementó en un 1457,86%, debiendo considerarse la depreciación constante que sufrió diariamente ese crédito desde su indisponibilidad en cada fecha sufrida de la detracción -por su exposición a los índices de inflación constante conforme las publicaciones oficiales del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)-.” -sic-.

Alega que, al día de la fecha, el Fisco ya cuenta con un impuesto ingresado por Finadiet a sus arcas fiscales, por sumas que alcanzan para satisfacer el impuesto determinado a su parte: “... (Saldo a Favor de \$11.243.055,39.-, contra un Impuesto Determinado de \$2.241.685,25, que como se evidencia representa un porcentaje en exceso del 501,54% conforme lo acreditó mi mandante con la Certificación Contable aportada.” (sic).

Manifiesta que, de esta forma, se obliga a su parte a soportar una suerte de empréstito forzoso, toda vez que “de facto” se detraen fondos que no pueden imputarse razonablemente al pago del impuesto sobre los ingresos brutos determinado, en cuanto excede precisamente el impuesto determinado en la jurisdicción. Aduce que ello ha sido debidamente acreditado a través de la certificación contable acompañada junto con la demanda.

Tras citar un fallo de esta Sala que considera favorable a su postulación, expone que “[s]e advierte así a todas luces un criterio para la determinación del límite de afectación del derecho de propiedad de mi mandante en el caso concreto, todo lo cual acredita la confiscatoriedad de las detracciones SIRCREB y SIRPEI en el caso concreto” (sic).





Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

Esgrime que, al no poder ser absorbidos los fondos retenidos, ni existir un procedimiento efectivo que le permita disponer de ellos, se genera un perjuicio irreparable de imposible reparación ulterior, perjuicio que en los hechos concretos ya se viene consumando y sufriendo, razón por la cual lo que se pretende con la medida solicitada es poder al menos mermar los futuros perjuicios que generan los sistemas SIRCREB y SIRPEI en el caso concreto.

Insiste en que el perjuicio económico y financiero que se le viene ocasionando y se ocasionará a su parte con las retenciones SIRCREB y SIRPEI, se encuentra acreditado con la certificación contable; a lo que se suman las consecuencias del proceso inflacionario que atraviesa el país. Añade que, en tales condiciones, acudir a un proceso de repetición provocará que, en su oportunidad, los saldos hayan perdido casi la totalidad del poder de compra que tenían al momento de ser retenidos.

Patentiza que, por tal razón, resulta indispensable que se conceda la medida cautelar de no innovar, a los fines de que no se le sigan reteniendo y de este modo que no se le sigan acumulando saldos a favor de su parte, ya que la posterior devolución de fondos en una moneda depreciada provocaría un daño de imposible reparación.

Recalca que el argumento dado por el Sr. juez es improcedente, puesto que su parte está sufriendo un menoscabo financiero todos los meses, en forma constante y repetida, con las retenciones que las entidades bancarias le aplican.

Asevera que no se encuentra comprometida la recaudación tributaria, ya que su parte ingresa todos los meses el impuesto determinado y lo que se trata de evitar es de que siga aumentando el saldo a favor, que ha alcanzado niveles confiscatorios producto de este ilegal sistema de recaudación anticipada.





Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

Pone de relieve que la existencia de la acción de repetición como vía posible para resarcir un daño económico, no es suficiente para rechazar la medida cautelar solicitada.

Cita jurisprudencia de esta Cámara favorable a su postulación.

Explica que: - los regímenes de recaudación SIRCRES y SIRPEI, funcionan como un pago a cuenta anticipado del impuesto sobre los ingresos brutos, que en todos los casos el contribuyente tiene la obligación de liquidar e ingresar recién al mes siguiente al vencimiento de la posición mensual; - es por ello que, en el caso, no se estará afectando la recaudación tributaria de ninguna provincia en particular y, por tanto, éstas no sufrirán ningún perjuicio fiscal derivado de la medida cautelar requerida; con dicha medida, Finadiet no dejará de ingresar, en ningún caso, el impuesto correspondiente en cada una de las provincias (inclusive Chaco), pero sí evitará seguir sufriendo cobros anticipados a cuenta del impuesto que derivan en la acumulación permanente de saldos a favor.

Arguye que ha quedado claramente demostrado que su parte ha dado cumplimiento a los requisitos para la procedencia de la tutela requerida, por lo que solicita que se revoque la resolución apelada, con costas a la demandada.

3.3) Sostiene que la disposición de la medida cautelar no afectará el interés público ni la normal percepción de la renta pública.

En este aspecto, pone de relieve que el interés público, las rentas del estado provincial y las del Estado Nacional no se verán afectadas con el otorgamiento de la cautelar.

Aclara que el Fisco involucrado al día de la fecha ya tiene en su poder sumas que no corresponden sea tributadas por su parte, generándole un enriquecimiento estatal sin causa.





Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

Explica que la cautelar no cercenará la recaudación, sino que únicamente impedirá el ejercicio de potestades recaudatorias inconstitucionales (SIRCRES-SIRPEI), que lo único que harán es aumentar el saldo a favor de su parte, que es justamente lo que se trata de evitar.

Recalca que, de manera errónea, el Sr. magistrado indica que de prosperar la medida cautelar solicitada se estaría afectando el derecho de defensa de las jurisdicciones afectadas como del Organismo Recaudador ARCA.

Advierte que las retenciones que sufre la firma por encontrarse en los padrones del SIRCRES o ser sujeto pasivo ante cada importación aduanera SIRPEI, no son más que pagos a cuenta o anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que resulta un tributo netamente provincial y ajeno por completo a las arcas del Estado Nacional.

Añade que “[c]on lo cual, por el solo hecho de que una vez finalizado el período fiscal los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos brutos deben calcular y abonar el impuesto a su vencimiento, queda claro que no existen jurisdicciones afectadas con la exclusión del SIRCRES y SIRPEI, ya que los contribuyentes igualmente deberán cancelar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en legal tiempo y forma” (sic).

Cita jurisprudencia favorable a su tesis.

Insiste en que “[e]s por ello, que mi mandante sea excluido de los padrones del SIRCRES y del SIRPEI, no afectará en nada la recaudación de ninguna jurisdicción provincial ya que al vencimiento de cada posición mensual FINADIET deberá liquidar y abonar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos determinado, pero sin haber sufrido las exacciones ilegales en exceso al impuesto determinado” (sic), y en que “... tampoco se vería afectada la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, en atención a que las sumas que recauda lo hace en carácter de Agente de Recaudación y no con la finalidad recaudatoria propia para la Administración Nacional” (sic).





Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

4°) Que en primer término, cabe señalar que la procedencia de la medida cautelar está determinada por la existencia de cuestionamientos sobre bases *prima facie* verosímiles, acerca de la legitimidad del acto cuyo cuestionamiento se formula (C.S.J.N., *Fallos*: 250:154; 251:336; 307:1702), y cuando se advierte la existencia de un daño inminente y grave a consecuencia de actos que lucen en apariencia arbitrarios para cuya valoración no es menester un examen de la certeza del derecho invocado, sino una suficiente apariencia de verosimilitud en el planteo del impugnante, acorde con la naturaleza, contenido y alcances del acto en cuestión.

Asimismo, ha de recordarse que cuando la medida cautelar se intenta contra una ley o un acto de la administración pública, es menester que se acredite *prima facie*, y sin que esto suponga un prejuizgamiento sobre la solución de fondo, la manifiesta arbitrariedad de la norma o del acto atacado, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los dos supuestos que la tornan admisible.

Y ello es así, en mérito a la presunción de legitimidad y la fuerza ejecutoria que caracteriza el actuar de los poderes del Estado, razón por la cual, en principio, los recursos y acciones mediante las que se discute su validez no suspenden su ejecución (confr. esta Sala, expte. n° 9528/2001 “Sauma S.R.L. -inc. med. c/ AFIP - DGI - marzo 96 s/ D.G.I.”, sentencia del 21/06/01 y, asimismo, causa n° 27.075/2012 “Repsol Butano SA c/EN -PEN- Ley n° 26741- Decretos n° 530 557 y 732/2012 s/ proceso de conocimiento”, sentencia de fecha 04/04/2012).

Desde esta perspectiva, para que proceda la tutela pretendida en supuestos como el de autos es menester que el peticionario acredite la arbitrariedad del acto recurrido o la violación de la ley para hacer caer la presunción de legalidad con la que cuentan los actos del poder público.

Por lo demás, no debe perderse de vista que el Alto Tribunal tiene dicho que el régimen de medidas cautelares suspensivas en materia de reclamos y cobros fiscales debe ser examinado con particular estrictez en cuanto

Fecha de firma: 17/04/2026

Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA



#40792592#497847642#20260416192335476



Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

la cuestión trasciende el interés individual de la actora y atañe también a la comunidad en virtud de una eventual perturbación en la oportuna percepción de la renta pública (*Fallos*: 313:1420; en el mismo sentido, CNACAF Sala V Expte. N° 21.576/2011, “Servicios Viales S.A. Concesionaria Rutas por Peaje c/EN –AFIP DGI- s/medida cautelar autónoma”, sentencia del 17 de noviembre de 2011, y esta Sala *in re* Expte. N° 59.369/2014 “Espert SA- Ezequiel Fernández Vila c/ EN- M° Economía y FP –AFIP -DGI s/Proceso de conocimiento”, sentencia del 15 de septiembre de 2015).

5°) Que la actora inició la presente acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad en los términos del artículo 322 del C.P.C.C.N., con el objeto de obtener un pronunciamiento sobre la incertidumbre que pesaba sobre su parte, “...*en razón de la inconstitucionalidad e indebida aplicación a FINADIET del denominado SIRCREB (‘Sistema de Acreditación y Control de Acreditaciones Bancarias’, conf. Resolución General N° 104/2004), y el denominado SIRPEI (Sistema del Régimen de Percepciones de Importaciones, conf. Resolución General N° 6/2020 y cctes.), cuya autoridad de aplicación resulta ser la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (en adelante, COMARB), a través de una de sus dependencias para el caso del SIRCREB, el Comité de Administración de los Sistemas Unificados de Recaudación Anticipada (SURA), con domicilio sito en calle Maipú 267, Piso 18°, de ésta Ciudad.*” [ver escrito de demanda].

Puntualizó que se hallaban reunidos, en el caso, los requisitos del artículo 322 del C.P.C.C.N., ya que la aplicación del SIRCREB y del SIRPEI se encontraba “...*en pugna flagrante con el principio de legalidad que impera en materia tributaria (arts 4, 17, 19, 52, 75 incs. 1 y 2 de la Constitución Nacional), el principio de defensa en juicio y debido proceso adjetivo (art. 18 CN), el derecho de propiedad de mi representada (art. 17 CN), la razonabilidad (art. 28 de la CN) y capacidad contributiva (art. 33 y cctes. CN), de trabajar y ejercer industria lícita, certeza, buena fe, confianza legítima, previsibilidad, predictibilidad y coherencia, como así también en pugna directa con la ‘cláusula comercial’ (art.*

Fecha de firma: 17/04/2026

Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA



#40792592#497847642#20260416192335476



Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

75 inc. 13 CN), y los artículos 9 y 75 1 y 10 de la Carta Magna en cuanto establecen que el Congreso de la Nación tiene la facultad exclusiva de regular el comercio entre las provincias y entre la República Argentina y otras naciones, y en materia aduanera, respectivamente” (sic).

Señaló que “... el objeto de la acción deducida persigue obtener por parte de V.S., la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución General N° 104/2004 y de la Resolución General N° 6/2020, ambas de la Comisión Arbitral, al caso concreto de mi mandante, declarando mal retenidas las sustracciones bancarias de las cuentas bancarias que se detallarán más adelante, en virtud del SIRCREB, y declarando mal efectuadas las percepciones del impuesto sobre los ingresos brutos en las operaciones de importación definitiva a consumo de mercaderías, en virtud del SIRPEI.” (sic);

Sostuvo que, en el caso, “... el total de las sumas retenidas/percibidas a FINADIET por aplicación del SIRCREB y SIRPEI ascendieron a la suma de pesos \$20.923.844,71 en los meses de 05/2024 a 07/2025, por lo que se advierte que la aplicación de los sistemas en el caso concreto de mi mandante, devienen manifiestamente irrazonables, pues dichas retenciones y percepciones superan en forma desproporcionada la obligación fiscal que, en definitiva, debe afrontar mi parte mensualmente e importan además la creación de un tributo sin ley” (sic).

Afirmó que su parte se encontraba sufriendo “ ...una exacción ilegal a su patrimonio y un desmedro financiero permanente y sostenido el tiempo, al acumular en forma constante y sostenida en el tiempo, saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (en adelante ISIB), sin poder disponer de ellos en debido tiempo (conforme se acredita con la certificación contable que se acompaña al presente y la prueba pericial contable que se deja ofrecida), todo lo cual termina vulnerando el derecho de propiedad de mi representada, entre otras garantías constitucionales mencionadas.” (sic).





Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

Tras referir a la competencia y a los antecedentes del caso, aludió a la procedencia formal de la presente acción.

En sustento de su postulación, formuló los planteos y manifestaciones que surgen del capítulo VIII del escrito de inicio (en aspectos tales como la vulneración del principio de reserva de ley, del derecho de propiedad, del principio de capacidad contributiva, de la garantía de razonabilidad, de los arts. 9° y 75, incs. 1°, 10 y 13 de la Constitución Nacional), a cuyos términos cabe remitir en atención a la brevedad.

En dicho marco, solicitó el dictado de una medida cautelar por la que dispusiera como prohibición de innovar, que se ordenara a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, *“... a abstenerse de realizar toda retención sobre acreditaciones bancarias por disposición de la RESOLUCIÓN GENERAL N° 104 de fecha 6 de septiembre de 2004 (y concordantes), en la cuenta corrientes de titularidad de mi parte afectadas por las detracciones cuestionadas”* (sic). Y, asimismo, para que dicha comisión se abstuviera de *“... realizar percepciones aduaneras sobre por RESOLUCIÓN GENERAL N° 6 de fecha 13 de mayo de 2020 (y concordantes), sobre los despachos de importación de mercaderías que realiza mi mandante.”* (sic).

En lo relativo a la verosimilitud del derecho, apuntó que, en el presente caso, *“...el derecho reclamado resulta verosímil en atención a que la aplicación de las exacciones ilegales entra en manifiesta y obvia contradicción principalmente al principio de legalidad que rige en materia tributaria (arts 4, 17, 19, 52, 75 incs. 1 y 2 de la Constitución Nacional), al derecho de propiedad de mi mandante (art.17 de la CN), entre otros principios de raigambre constitucional desarrollados a lo largo de la presente conforme ut supra se expuso.”* (sic).

Destacó que el aludido recaudo se desprendía de la propia conducta de la COMARB, quien obraba arbitrariamente colisionando con las normas legales de rango superior anteriormente descriptas.





Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

Citó jurisprudencia y postuló que en los capítulos anteriores se habían desgranado todos y cada uno de los agravios, netamente federales, que demostraban la directa y manifiesta conculcación de cláusulas y garantías constitucionales que resultaba de la imposición de la COMARB, y su írrito soporte legal.

En punto al peligro en la demora, aseveró que “...la inminencia y gravedad del daño surge evidente en el presente caso dado el ejercicio de mecanismos compulsivos de cobro que sufre mi mandante (lo cual se perfecciona con cada retención sobre las acreditaciones bancarias), con grave limitación de las defensas esgrimibles por mi parte.” (sic).

Sostuvo que en el presente caso se daba el supuesto por el que se entendía configurado este recaudo, consistente en que de no adoptarse la medida se ocasionaría un perjuicio o daño inminente aún mayor que al ya ocurrido, y que transformaría en tardío al eventual reconocimiento del derecho de la parte peticionante.

Esgrimió que ello era precisamente lo que acontecía en el *sub examine*, ya que, “...a menos que V.S. dicte la medida cautelar solicitada, ordenando una medida de no innovar, la parte demanda continuará EJECUTANDO sin limitación algunas retenciones sobre las acreditaciones bancarias en cuentas de propiedad de la Sociedad y percepciones aduaneras sobre mercaderías importadas, lo cual conduciría inexorablemente a la frustración de las garantías constitucionales en cuestión.” (sic).

6°) Que debe apuntarse que, en fecha reciente, este Tribunal se ha expedido sobre una cuestión sustancialmente análoga a la presente, al decidir en la causa “Priotti, Nancy María (((MC))) c/Comisión Arbitral de Convenio Multilateral s/proceso de conocimiento”, expediente N° 15.842/2024, [sentencia](#) del 21 de marzo de 2025.

En tales condiciones, cabe remitir, en atención a la brevedad, al examen preliminar realizado en dicha ocasión en orden a la normativa

Fecha de firma: 17/04/2026

Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA



#40792592#497847642#20260416192335476



Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

involucrada en el presente caso, así como a la cita de los fallos que versan sobre esta materia (cfr. considerando IV de la aludida sentencia).

7°) Que debe apuntarse, por lo demás, que en los presentes obrados, frente a las objeciones formuladas por la parte actora con relación a las sustracciones de las cuentas bancarias (SIRCRESB) y las percepciones del impuesto sobre los ingresos brutos en las operaciones de importación definitiva a consumo de mercaderías (SIRPEI) y en particular, lo sostenido en orden a que dichas sustracciones y percepciones (SIRCRESB y SIRPEI, respectivamente) no se sustentan en un procedimiento administrativo que cuente con un acto administrativo motivado y fundado; asimismo, la vulneración del principio de reserva de ley, de razonabilidad, de capacidad contributiva, entre otros aspectos, la parte demandada se ha limitado, en la oportunidad prevista por el art. 4° de la ley 26.854, a presentar la nota N° 396/2025.

En la referida nota, la COMARB brinda una exposición acerca de las características y funcionamiento del SIRCRESB, para luego señalar que:

- “j) *En el presente caso, FINADIET S.A.C.I.F.I., CUIT 30-50471041-2 es un contribuyente de Convenio Multilateral y durante el lapso mayo/2024 a julio/2025, fue incluido en el padrón de sujetos alcanzados por el Sistema SIRCRESB ininterrumpidamente, habiéndosele practicado retenciones por un total de \$ 558.119.396,88 con una distribución mensual, por jurisdicción y alícuota que se detalla seguidamente: (...)*” -incorpora aquí un cuadro con las jurisdicciones, los meses y años y las alícuotas-;

- “k) *En mérito a lo expuesto, considerando que la tutela del interés público comprometido, importa la protección de los derechos fundamentales y la preservación de aquellas potestades estatales ordenadoras de las actividades económicas y sociales, que resultan indispensables para generar las condiciones de vida que garanticen el pleno goce y efectividad de aquellos derechos a toda la comunidad, en el presente caso, entendemos que corresponde requerir a las jurisdicciones involucradas (no demandadas), que se*

Fecha de firma: 17/04/2026

Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA



#40792592#497847642#20260416192335476



Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

expidan sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida cautelar solicitada, teniendo en cuenta que su eventual otorgamiento -en la forma que ha sido solicitada -, suspendería una función básica del estado provincial, entendiendo por tal, la percepción de los tributos necesarios para solventar los gastos correspondientes a la actividad del estado, desconociendo con ello, facultades que son propias y exclusivas del Organismo Recaudador.

Por tal motivo, siendo el sujeto activo de la relación tributaria (el ente recaudador de la jurisdicción que estableció el régimen de recaudación que integra la relación jurídica sustancial de la pretensión de la actora) quien posee la prerrogativa de informar el interés público comprometido respecto de la medida cautelar solicitada, es que consideramos que corresponde su participación. (...)" -sic-;

- "I) Todo ello sin perjuicio de advertir que el contribuyente cuestiona normativas del organismo que represento, pero no menciona y nada objeta de las leyes locales provinciales que establecieron los diferentes regímenes de recaudación, dentro de las facultades previstas en cada jurisdicción, determinando el ámbito de aplicación, definiendo los agentes de recaudación, los sujetos alcanzados, las excepciones y exclusiones, la conceptualización referida a los montos recaudados como pago a cuenta del impuesto, alícuotas, etc. Y, además, se dirige la demanda contra la Comisión Arbitral, el cual carece de legitimación pasiva para ser demandada sobre esta cuestión, omitiendo citar a las jurisdicciones involucradas, sujetos activos de las relaciones tributarias y destinatarias de las retenciones efectuadas, que establecieron los regímenes y que incluyeron al contribuyente como sujeto alcanzado." (sic).

Idéntico temperamento se adopta en la nota a la que se viene haciendo referencia, en lo atinente al SIRPEI, aspecto sobre el que la CONARB, luego de indicar las características y el funcionamiento del sistema, aduce que:





Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

- “p) *En mérito a lo expuesto, considerando que el contribuyente cuestiona la constitucionalidad de la Resolución General CA N° 6/2020, que únicamente tiene por objeto ratificar el Convenio celebrado con la Administración Federal de Ingresos Públicos del 30 de abril de 2003, pero no objeta la Instrucción General IG-2020-1-E-AFIP-DIPNPA#SDGREC, ni demanda a la ARCA (ex AFIP), ni a las jurisdicciones involucradas, sujetos activos de las obligaciones tributarias y destinatarias de las sumas retenidas, que establecieron los regímenes y que incluyeron al contribuyente como sujeto alcanzado en las operaciones aduaneras, en nuestra opinión, corresponde requerir su participación, para exponer el interés público comprometido respecto de la medida cautelar solicitada.*” (sic);

- “q) *En el Sistema SIRPEI, FINADIET S.AC.I.F.I. CUIT 30-50471041-2, es un contribuyente de Convenio Multilateral y durante el lapso mayo/2024 a julio/2025, se informa que estuvo sujeto a percepciones aduaneras por un total de \$ 229.319.036,88 distribuidos entre las distintas jurisdicciones, según el siguiente detalle: (...)*” -sic-; ver cuadro obrante en dicho informe-.

Al respecto, cabe señalar que según se advierte *prima facie*, de modo coincidente con lo acontecido en las causas: “Cofco International Argentina S.A.”, “Adeco Agropecuaria S.A.” y “Priotti” (las dos primeras, citadas, a su vez, en la causa “Priotti”, conforme lo indicado en el considerando 6° del presente pronunciamiento), en las presentes actuaciones la parte demandada no ha controvertido los aspectos relevantes de la cuestión planteada por la parte actora, sino que se ha limitado a explicar los aspectos del funcionamiento del SIRCREB y del SIRPEI, y a sostener que debe darse intervención a los fiscos locales y al ARCA, sin hacerse cargo de los fundamentos en los que la actora sustenta su tesitura y peticiona la presente medida cautelar.

En tales condiciones, cabe formular idénticas consideraciones a las sostenidas en dichas ocasiones, al concluir que: “...*también cabe destacar que, en oportunidad de presentar el informe que le fuera requerido por este*





Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

Tribunal, la demandada no ha controvertido aspectos relevantes de la cuestión planteada por su contraria, en particular, lo concerniente a la ausencia de motivación y de procedimiento legal impuesto legítimamente para la detracción y la transferencia directa de una porción de los depósitos bancarios de la actora a las cuentas bancarias de los fiscos por el 'Sircreb', aspecto también abordado por la Sala III en el fallo antes referido (cfr. Causa N.º 81.372/2016, "Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo y Servicios Sociales Palmares Limitada c/Comisión Arbitral del Convenio Multilateral s/proceso de conocimiento", del 29/06/2017 y, en el mismo sentido, la sentencia de primera instancia emitida en el Expte. N.º 30.138/2018 "Hernán Buchholz S.A. Comisión Arbitral del Convenio Multilateral s/proceso de conocimiento", del 10/9/2018; que ha sido consentida por la Comisión Arbitral según el escrito agregado en esos autos el 27/9/2018).'.

'A lo que cabe añadir, en coincidencia con lo señalado por la parte actora, que surge prima facie de las constancias de la causa que las sustracciones bancarias efectuadas mediante el sistema cuestionado, no cuentan con un procedimiento administrativo motivado y fundado, el cual a la vez no respeta una adecuada correlación entre su capacidad contributiva y lo efectivamente recaudado, situación que en principio y en un análisis inicial de la cuestión no aparece refutada por la demandada" (ver esta Sala, "Cofco International Argentina S.A." y "Adeco Agropecuaria S.A.").

8º) Que la parte actora sostiene que, en el caso, "...se advierte que el total de las sumas retenidas/percibidas a FINADIET por aplicación del SIRCREB y SIRPEI ascendieron a la suma de pesos \$20.923.844,71 en los meses de 05/2024 a 07/2025, por lo que se advierte que la aplicación de los sistemas en el caso concreto de mi mandante, devienen manifiestamente irrazonables, pues dichas retenciones y percepciones superan en forma desproporcionada la obligación fiscal que, en definitiva, debe afrontar mi parte mensualmente e importan además la creación de un tributo sin ley" (sic) -ver escrito de demanda, pág. 3-.

Fecha de firma: 17/04/2026

Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA



#40792592#497847642#20260416192335476



Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

Apunta que:

“En la práctica, teniendo en cuenta las ‘sustracciones bancarias y aduaneras’ que viene sufriendo FINADIET en los meses de 05/2024 a 07/2025, se estaría tributando en la jurisdicción de Chaco, a una alícuota incrementada en un 582,63% respecto de la que corresponde a las actividades desarrolladas (conforme se acredita con la certificación contable que por el presente acompaña como prueba, y la pericial contable que se deja ofrecida).”

En efecto, la Sociedad se encuentra sufriendo un desmedro financiero y económico permanente y sostenido en el tiempo, al acumular en forma constante y permanente, saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos retenidos y percibidos en las Arcas Fiscales, sin poder disponer de ellos en debido tiempo, con el agravante de la exposición inflacionaria que hace que esos saldos se deprecien mes a mes, todo lo cual termina vulnerando el derecho de propiedad de mi representada” (sic) -ver demanda, págs. 15 y 16-.

En los presentes obrados, la “CERTIFICACIÓN CONTABLE SOBRE INCIDENCIA DE LAS DETRACCIONES BANCARIAS DEL SIRCREB Y PERCEPCIONES ADUANERAS SIRPEI EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS CONVENIO MULTILATERAL PARA LA JURISDICCION CHACO” (sic) acompañada como prueba por la parte actora (ver Anexo III de la documental, incorporada el 16 de septiembre de 2025), avala, en principio -y dicho esto, claro está, con la provisionalidad que es propia de este tipo de procesos-, la tesitura de la accionante.

Es así que, de dicha certificación surgen los siguientes datos:

- Saldo a favor 07/2025: 11.243.055,39 (A);
- Impuesto determinado 07/2025: 2.241.685,25 (B);
- Saldo a favor sobre impuesto mensual: 501,54 % (A.100/B);
- Acumulado recaudaciones SIRCREB-SIRPEI 05/2024 a 07/2025: 20.923.844,82 (D);





Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

- SIRCREB-SIRPEI Chaco a la DDJJ 05/2024:
1.435.244,71(J);
- Ratio del incremento de la recaudación SIRCREB-SIRPEI desde 05/2024 a 07/2025: 1.457,86 % (D.100/J);
- Alícuotas de la actividad principal:
 - Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos: 1,50%
 - Venta al por mayor de productos farmacéuticos: 1,00 %
 - Alícuota Promedio 1,25 % (E);
 - Base Imponible Neta IIBB 07/2025: 154.375.528,71 (F);
 - Alícuota efectiva incrementada: 7,28 % (A/F.100=G);
 - Incremento de la alícuota efectiva del 582,63 % (G.100/E).

Por otra parte, de la declaración jurada del “Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral”, anticipo 202507, correspondiente a la firma actora y aportada como prueba documental incorporada el 16 de septiembre de 2025 (ver anexo II), surge, respecto de la jurisdicción de la Provincia de Chaco, como “Anticipo Impuesto Determinado”, la suma de \$ 2.241.685,25; como “A Favor Contribuyente”, la suma de \$ 11.243.055,39, y como “A Favor Fisco”, la suma de \$ 0,00.

Todo lo cual permite considerar, en este estado inicial del proceso y con ajuste a un examen preliminar de las constancias aportadas a la causa que, en principio, las sustracciones que se están llevando a cabo bajo el concepto SIRCREB/SIRPEI correspondiente a la jurisdicción de Chaco, no guardarían razonabilidad ni proporcionalidad en este caso concreto.

Como corolario de ello, se observa que el conjunto de las circunstancias descriptas, sumado a las limitadas competencias que el Convenio Multilateral ha otorgado a la Comisión Arbitral y la protección que los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional prescriben respecto de los derechos de propiedad y de defensa en juicio, conducen, sin perjuicio del examen definitivo

Fecha de firma: 17/04/2026

Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA



#40792592#497847642#20260416192335476



Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

que debe efectuarse en la sentencia de mérito, a tener por acreditados los requisitos previamente enunciados de verosimilitud en el derecho y de peligro en la demora (cfr. en sentido concordante, ver esta Sala en los autos: “Cofco International Argentina S.A.” y “Adeco Agropecuaria S.A.”, y Sala III, *in re*, “Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo y Servicios Sociales Palmares Limitada”).

Máxime, si se recuerda que ambos presupuestos se encuentran de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente en la apreciación del peligro en la demora y viceversa (cfr. esta Sala, Causa: 30570/2011, *in re*, “Inter Logater S.A. y otro c/E.N. -J.G.M. -Resol 1164/11 s/proceso de conocimiento”, sentencia del 14/02/2012; ver, asimismo, Sala V, autos: “Ribereña de Río Negro S.A. c/D.G.I.”, del 8/11/1996, entre otros).

9º) Que, por otra parte, con relación a la afectación del interés público, la demandada no ha contestado el traslado que le fuera conferido respecto del memorial de agravios de la actora, y por lo mismo tampoco ha expuesto argumento alguno tendiente a cuestionar la ausencia de tal afectación.

En cuanto a este punto, es menester confrontar en el caso la irreversibilidad del daño que pueda causarse al interés privado con aquélla que pueden sufrir los intereses generales, a los fines de equilibrar provisionalmente tales intereses encontrados, dado que si bien la suspensión de los efectos de las decisiones administrativas, comporta un remedio de suyo excepcional, permite enjuiciar la corrección del acto antes que su ejecución haga inútil el resultado del planteo (cfr. Parada, Ramón, “Derecho Administrativo”, t.I, pág. 174, 7a. edición, Marcial Pons Ed. Jurídicas, Madrid, 1995; Chinchila Marín, C., “La Tutela Cautelar en la Nueva Justicia Administrativa”, pág. 29, Ed. Civitas, Madrid 1994).

Ello así, pues, en definitiva, en un balance de ponderación, impresionan como mucho más gravosas las consecuencias que para la actora tendría el rechazo de la cautela que para la Comisión demandada adoptar la

Fecha de firma: 17/04/2026

Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA



#40792592#497847642#20260416192335476



Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

medida solicitada (cfr. arg. C.N. Civ. y Com. Fed., Sala III, causas: 8430, del 28/02/1992; 157, del 4/09/1992 y sus citas; 729, del 16/10/1992).

10) Que, a mérito de todo lo expuesto, a los fines de evitar perjuicios innecesarios y en virtud de la importancia de los derechos que se intentan proteger, cabe admitir la medida cautelar peticionada y ordenar a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y/o a su Comité de Administración que se abstengan de efectuar, respecto de la actora, las detracciones o retenciones previstas por las Resoluciones Generales N° 104/2004 y 6/2020, por intermedio de los agentes de recaudación allí estipulados, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos (cfr. artículo 204 del C.P.C.C.N. y esta Cámara, Sala IV, Causa 24.173/2011 “Pandurata Alimentos Ltda. Suc. Arg. -inc med (1°-VII-11) c/E.N. - A.N.M.A.T. -I.N.AL. -nota 598/11 s/amparo ley 16.986”, sentencia del 14/07/2011).

11) Que, por último, en cuanto a la contracautela que corresponde imponer, cabe recordar que su fijación es, por principio, privativa del juez (cfr. art. 199, del C.P.C.C.N.; esta Sala, Causa N.° 39.443/05, *in re*, “Enrique Trucco e Hijos S.A. c/E.N. -M° Economía -Resol 485/05 -A.F.I.P. -D.G.A. s/medida cautelar (autónoma)”, sentencia del 3/03/2006 y sus citas, entre otros) y que su finalidad responde a la responsabilidad por daños y perjuicios que puedan derivar de la traba de la medida cautelar.

En consecuencia, en atención a las circunstancias que surgen del caso y la naturaleza de la cuestión planteada, se estima conducente fijar una caución real, por la suma de pesos un millón quinientos mil (\$ 1.500.000), la que deberá ser instrumentada ante el Sr. juez de la instancia de origen, mediante un depósito en Banco Oficial en efectivo, en títulos, bonos o la constitución de seguros de caución; en todos los casos, a la orden de dicho Juzgado y causa.

12) Que en atención a la forma como se decide y a las especiales circunstancias del caso, las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado (cfr. art. 68, segunda parte, del C.P.C.C.N.).

Fecha de firma: 17/04/2026

Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA



#40792592#497847642#20260416192335476



Poder Judicial de la Nación
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

Por ello, se **RESUELVE**: 1º) hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, revocar la resolución apelada, conceder, en los términos del artículo 204 del C.P.C.C.N. la medida cautelar requerida y, en consecuencia, ordenar a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y/o a su Comité de Administración que se abstenga de efectuar, respecto de la actora las detracciones o retenciones previstas por las Resoluciones Generales N° 104/2004 y 6/2020 y, por intermedio de los agentes de recaudación allí estipulados, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos, y 2º) imponer las costas de ambas instancias en el orden causado, de conformidad con lo señalado en el considerando que antecede.

Regístrese, notifíquese y devuélvase a la instancia de origen a fin de que, previo cumplimiento por parte de la actora de la caución real ordenada, se comunique la presente a las demandadas, mediante oficio de estilo.

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

LUIS M. MÁRQUEZ

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

Fecha de firma: 17/04/2026

Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA



#40792592#497847642#20260416192335476